

# El principio de preservación en el derecho comunitario andino: un imperativo desde la seguridad jurídica\*

## The principle of preservation in Andean community law: an imperative from a legal security perspective

Iván Vargas-Chaves<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Doctor en Derecho Supranacional e Interno por la Università di Palermo, Italia; doctor en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Barcelona, España. Profesor universitario. Investigador RENACYT (Nivel II) de la Universidad Señor de Sipán, Perú.

Correo: [vargasivan@uss.edu.pe](mailto:vargasivan@uss.edu.pe).  ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6597-2335>.

---

### Resumen

El presente artículo tuvo como objetivo analizar el rol clave del principio de preservación del ordenamiento jurídico comunitario andino como garante fundamental de la seguridad jurídica dentro del sistema de integración de la Comunidad Andina. La metodología empleada fue un análisis documental con enfoque sistemático y teleológico, para lo cual se revisaron críticamente fuentes doctrinales sobre derecho

comunitario andino y teorías sobre seguridad jurídica. Los resultados indican que, a pesar de la complejidad conceptual de la seguridad jurídica, esta se sustenta primordialmente en el principio de preservación del ordenamiento jurídico. Dicho principio, a través de la obligatoriedad e intangibilidad de las normas y de la actuación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proporciona la estabilidad y previsibilidad necesarias. La principal conclusión es que la preservación del ordenamiento jurídico no es una característica accesorio, sino el pilar fundamental que dota de efectividad y credibilidad a la seguridad jurídica en la Comunidad Andina, lo cual es una condición indispensable para que el derecho comunitario cumpla sus fines

---

\*El presente artículo es resultado del proyecto “La Configuración de la Agenda Internacional para los Recursos Fitogenéticos: Una aproximación desde las Relaciones Poder/Conocimiento”, financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú.

integradores con certeza y confianza.

### Palabras clave:

seguridad jurídica, Comunidad Andina, principio de preservación, derecho comunitario, Sistema Andino de Integración.

### Abstract

This paper aimed to analyze the central role of the principle of preservation of the Andean community legal order as a fundamental guarantor of legal certainty within the Andean Community integration system. The methodology employed was a documentary analysis with a systematic and teleological approach, critically reviewing doctrinal sources on Andean community law and theories on legal certainty. The results indicate that, despite the conceptual complexity of legal certainty, it is primarily based on the principle of preservation of the legal order. This principle, through the binding nature and intangibility of norms and the actions of the Court of Justice of the Andean Community, provides the necessary stability and predictability. The main conclusion is that the preservation of legal order is not an accessory feature but the fundamental pillar that endows legal certainty with effectiveness and credibility within the Andean Community, being an indispensable condition for community law to fulfill its integrative purposes with certainty and confidence.

### Keywords:

legal security, Andean Community, preservation principle, community law, Andean Integration System.

## Introducción

El proceso de integración de la Comunidad Andina ha dado lugar a un ordenamiento jurídico supranacional con características distintivas, en el que la predictibilidad y la estabilidad normativa son cruciales para su funcionamiento y la consecución de sus objetivos. En este contexto, el principio de seguridad jurídica, entendido como la certeza sobre el derecho aplicable y la protección contra la arbitrariedad, adquiere una relevancia capital (Indacochea, 2024)

Sin embargo, la definición y alcance de la seguridad jurídica son objeto de debate doctrinal, ya que se presenta como un concepto polisémico y de contenido a veces indeterminado, especialmente al trasladarse al complejo entramado del derecho comunitario. A pesar de su aparente abstracción, la seguridad jurídica se erige como una herramienta heurística fundamental para la consolidación de cualquier sistema legal (Viandier, 1988).

Por lo tanto, el presente artículo se enfoca en la particular manifestación y garantía de este principio dentro del ecosistema normativo andino, que, según se sostiene, encuentra un anclaje robusto y específico. Para ello, se plantea como pregunta guía: ¿De qué manera el principio de preservación del ordenamiento jurídico comunitario andino fundamenta y garantiza la seguridad jurídica en el marco de este sistema de integración supranacional?

Como hipótesis se contempla un escenario en el cual la seguridad jurídica en el derecho comunitario andino, a pesar de su complejidad conceptual, se

sustenta primordialmente en el principio de preservación del ordenamiento jurídico, el cual, a través de la obligatoriedad e intangibilidad de las normas y la actuación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proporciona la estabilidad y la previsibilidad necesarias para los Estados miembros y los ciudadanos.

Para responder esta pregunta central, y cumplir el objetivo de analizar el rol central del principio de preservación del ordenamiento jurídico comunitario andino como garante fundamental de la seguridad jurídica dentro del sistema de integración de la Comunidad Andina, se recurre a una metodología de análisis documental, con un enfoque sistemático y teleológico que implicó la revisión y el análisis crítico de fuentes doctrinales sobre derecho comunitario andino, y aproximaciones teóricas que abordan el concepto de seguridad jurídica, tanto en términos generales como en su aplicación específica al derecho comunitario y supranacional.

El artículo concluye que la preservación no es, por tanto, una mera característica accesoria del derecho comunitario andino, sino el pilar fundamental que dota de efectividad y credibilidad a la seguridad jurídica dentro de la comunidad. Sin la salvaguarda activa de las normas comunitarias y su correcta aplicación, cualquier aspiración a una seguridad jurídica genuina sería ilusoria, ya que comprometería la predictibilidad necesaria para el comercio, la inversión, la protección de los derechos y, en última instancia, el avance del proyecto de integración regional. Es, en esencia, la condición *sine qua non* para que el

derecho comunitario andino cumpla sus fines integradores con certeza y confianza para todos los actores involucrados.

## Metodología

El presente artículo, como resultado de investigación, se desarrolló mediante una metodología de análisis documental, con un enfoque cualitativo. Dicho análisis se centró en la revisión, interpretación y sistematización de fuentes jurídicas y académicas relevantes para el estudio de la seguridad jurídica en el marco del derecho comunitario andino. Este análisis, además, se guió por dos enfoques hermenéuticos específicos para la comprensión del fenómeno jurídico estudiado: el jurídico-sistemático y el teleológico.

El análisis documental se llevó a cabo en tres fases principales. En primer lugar, durante la fase de recolección y selección de fuentes, se realizó una búsqueda exhaustiva de documentos pertinentes en diversas bases de datos académicas y jurídicas. La selección inicial se basó en la relevancia directa de los títulos, resúmenes y palabras clave con el objeto de estudio. Posteriormente, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión más detallados, como la rigurosidad académica, la autoridad de la fuente y la actualidad, aunque se consideraron textos fundacionales independientemente de su fecha.

En una segunda fase, dedicada a la organización y sistematización de la información, los documentos seleccionados fueron clasificados y organizados temáticamente en función de los ejes centrales

de la investigación. Para ello, se utilizaron herramientas de gestión bibliográfica y fichas de análisis para extraer y sistematizar la información relevante.

Finalmente, en la tercera fase, correspondiente al análisis e interpretación del contenido, se procedió al análisis crítico e interpretativo de la información recolectada, aplicando los enfoques jurídico-sistemático y teleológico. En esta etapa, se buscó identificar patrones, argumentos centrales y cómo estos contribuían a responder la pregunta de investigación y a validar la hipótesis.

Respecto a los enfoques de interpretación jurídica, el enfoque jurídico-sistemático permitió analizar el principio de preservación y la seguridad jurídica no como elementos aislados, sino como parte integral del ordenamiento jurídico comunitario andino. De esta manera, se examinó la ubicación jerárquica y la interrelación del principio de preservación con otros principios fundamentales del derecho andino; cómo la obligatoriedad e intangibilidad de las normas se articulan para conformar su dimensión protectora; el papel del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de la estructura institucional; y la coherencia interna de las normas pertinentes.

Por su parte, a través del enfoque teleológico se buscó comprender la finalidad o *telos* del principio de preservación en relación con la seguridad jurídica y los objetivos superiores de la integración andina. Así, se analizó el propósito que perseguía el ordenamiento andino al establecer la obligatoriedad e intangibilidad de sus normas; cómo la actuación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contribuye a

la consecución de la seguridad jurídica como valor y herramienta para la efectiva integración; y la función de la seguridad jurídica como medio para alcanzar los objetivos de la Comunidad Andina.

Para la recolección de documentos, se emplearon palabras clave (en español e inglés, según la base de datos) y operadores booleanos. Entre las palabras clave principales se incluyeron: “seguridad jurídica”, “derecho comunitario andino”, “Comunidad Andina”, “principio de preservación”, “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, “obligatoriedad normas andinas” e “intangibilidad normas andinas”. Para refinar las búsquedas se utilizaron combinaciones con *and*, *or*, y *not*, como, por ejemplo: (“seguridad jurídica” *or* “legal certainty”) *and* (“derecho comunitario andino” *or* “*Andean Community Law*”).

Las fuentes fueron consultadas en diversas bases de datos académicas y jurídicas reconocidas, tales como Web of Science (WoS), Scopus, SciELO, Redalyc, HeinOnline, JSTOR y EBSCO. Adicionalmente, se revisaron los portales web oficiales de la Comunidad Andina y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para acceder directamente a normativa, jurisprudencia y publicaciones oficiales.

En la selección de material, se priorizaron artículos de investigación, libros y capítulos de libros, tesis doctorales, jurisprudencia relevante y los textos normativos fundacionales y derivados del ordenamiento jurídico andino.

## Resultados

### El derecho comunitario andino en contexto

El derecho comunitario andino como ordenamiento jurídico supranacional es la base operativa en el proceso de integración de los países miembros de la Comunidad Andina. Configurado como un ordenamiento jurídico común, este sistema normativo no solo refleja la voluntad soberana de los Estados parte de construir un espacio subregional cohesionado, sino que también evidencia la creación de una estructura jurídica autónoma, con poderes y competencias propias, destinadas a regular las relaciones y alcanzar los objetivos comunes trazados (Rodríguez, 2018; Blanco Alvarado et ál., 2022).

De acuerdo con Montaña Galarza (2003), su singularidad radica en su naturaleza supranacional y en la complejidad de sus fuentes, que abarcan desde los tratados fundacionales hasta la jurisprudencia emanada de su propio órgano jurisdiccional. Esta afirmación, extraída del análisis de su composición, subraya que no se trata de un mero agregado de normas, sino de un conjunto coherente y organizado que opera a través de instituciones con facultades específicas, con decisiones con una estructura jerárquica superior al derecho interno e internacional de los Estados miembros (García Brito, 2024).

La atribución de poderes y competencias por parte de los Estados Miembros, efectuada en el ejercicio de su soberanía, es el acto fundacional que dota de legitimidad y eficacia a este ordenamiento (Arroyave-Quintero, 2008). Dicha transferencia se materializa en

los tratados constitutivos y sus sucesivos protocolos modificatorios, documentos que actúan como la “constitución” de este sistema legal subregional.

Para autores como Blanco Alvarado y Fernández Muñoz (2021) y Rodríguez Aguilera (2016), la piedra angular de este edificio normativo se encuentra definida en el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Este precepto enumera las fuentes que componen el derecho comunitario andino, y delinea con claridad su alcance.

En primer lugar, como fuentes primarias, se sitúan el *Acuerdo de Cartagena*, considerado el tratado fundacional de la integración andina, junto con sus protocolos e instrumentos adicionales. A este se suma el propio *Tratado de creación del Tribunal de Justicia* y sus correspondientes protocolos modificatorios, que establecen el marco institucional para la resolución de controversias y la interpretación uniforme del derecho comunitario.

A este núcleo normativo lo complementan fuentes secundarias o derivadas las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina, que representan el poder legislativo derivado; y las resoluciones de la Secretaría General, con un carácter más ejecutivo y administrativo.

Y, finalmente, como fuentes auxiliares, están los convenios de complementación industrial y otros que los Estados miembros adopten entre sí en el marco del esquema subregional, que fomenten la cooperación en áreas específicas, además de las disposiciones normativas internas e internacionales

incorporadas en el ordenamiento de los Estados como parte de un complemento indispensable de este derecho comunitario.

Una característica distintiva del derecho comunitario andino, compartida con otros ordenamientos de integración como el europeo, es su estructura supranacional. Como se indicó previamente, esto implica que sus normas se sitúan en un plano superior al de los ordenamientos jurídicos internos de los países miembros en las materias que han sido cedidas a la competencia comunitaria (Navarrete Barrero, 2006).

A su vez, al interior del ordenamiento comunitario, esto es, dentro de este sistema supranacional, existe una jerarquía interna clara: las normas jurídicas constitutivas, también denominadas originarias o primarias, gozan de primacía sobre las normas derivadas. Estas últimas, para ser válidas, deben supeditarse y ser conformes al derecho originario (Antolínez Sánchez, 2021).

En efecto, el Estatuto del Tribunal de Justicia Andino profundiza en esta distinción jerárquica. Las normas constitutivas, originarias o primarias son aquellas que emanan directamente de la voluntad soberana de los Estados miembros al momento de crear o modificar sustancialmente el sistema de integración.

Estas comprenden, como ya se mencionó, el *Acuerdo de Cartagena* con sus protocolos modificatorios e instrumentos adicionales, y el *Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, también con sus respectivos protocolos e instrumentos adicionales. Estas fuentes son la expresión más directa del consentimiento estatal y establecen los principios, objetivos y la

arquitectura institucional de la Comunidad Andina.

Por otro lado, las normas derivadas son producto del ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos comunitarios. Estas incluyen las decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina, así como las resoluciones de la Secretaría General y los convenios de complementación industrial.

La diferencia fundamental entre las fuentes originarias y las derivadas radica en su génesis. Mientras las primeras son de naturaleza convencional, fruto de acuerdos directos entre los Estados soberanos, las segundas emergen de un proceso legislativo llevado a cabo por los órganos supranacionales de la Comunidad Andina. A estos órganos se les ha transferido la competencia para legislar en ámbitos específicos, lo que les permite desarrollar y ejecutar los mandatos contenidos en el derecho originario (Montoya Céspedes, 2009; Kosovic Kaune, 2007).

Concordando con Santos Rodríguez (2013), este proceso legislativo supranacional es una manifestación palpable de la autonomía del derecho comunitario andino y de su capacidad para generar normas vinculantes para los Estados miembros y sus nacionales. En efecto, la autonomía del ordenamiento jurídico andino, como principio, garantiza que los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración gocen de la independencia necesaria frente a las autoridades de los países miembros para cumplir sus funciones.

Más allá de estas fuentes formalmente normativizadas, el derecho comunitario



andino se nutre también de fuentes no escritas o no positivizadas explícitamente como normas. Entre estas destacan los principios generales del derecho y la jurisprudencia comunitaria.

Los principios generales del derecho, reconocidos universalmente, o aquellos propios del sistema de integración andino, actúan como herramientas de interpretación e integración, colmando lagunas y orientando la aplicación de las normas. Por su parte, la jurisprudencia comunitaria, emanada principalmente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, juega un rol crucial. A través de sus sentencias y opiniones consultivas, el tribunal no solo resuelve disputas, sino que también interpreta el alcance de las normas comunitarias, asegura su aplicación uniforme y contribuye a la evolución y consolidación del ordenamiento jurídico andino. Esta labor jurisprudencial se convierte, en la práctica, en una fuente material de derecho de innegable trascendencia, puesto que dota de contenido y dinamismo al sistema (Sasaki Otani, 2012).

De esta manera, el derecho comunitario andino se presenta como un ordenamiento jurídico complejo y sofisticado, dotado de una estructura jerárquica clara y de mecanismos propios para la producción normativa. Su carácter supranacional, fundamentado en la cesión de competencias soberanas por parte de los Estados miembros, le otorga una posición preeminente en las materias de su competencia.

Este entramado normativo e institucional no es un fin en sí mismo, sino el instrumento esencial para la consecución de los objetivos de integración económica, social y política de

la Comunidad Andina, lo cual demuestra ser un sistema vivo y en constante evolución al servicio de la unidad subregional.

## **La supranacionalidad: un pilar del derecho comunitario andino**

El proceso de integración andino, materializado en la Comunidad Andina, no solo representa un esfuerzo de concertación política y económica, sino que también ha erigido un ordenamiento jurídico singular y robusto, cuyas características distintivas son cruciales para su funcionamiento y la consecución de sus objetivos. En este sentido, como señala Marcel Tangarife Torres, este entramado normativo se define por cuatro pilares interconectados: “la supranacionalidad, la autonomía, la preservación y el complemento indispensable” (2005, p. 282). La supranacionalidad constituye la piedra angular del ordenamiento jurídico andino, que lo diferencia cualitativamente del derecho internacional público tradicional. Implica una transferencia de competencias soberanas por parte de los Estados miembros hacia órganos comunitarios, cuyas decisiones adquieren un carácter vinculante y, en muchos casos, de aplicación directa (Brewer Carías, 2003).

Uribe Restrepo (1990) identifica seis elementos constitutivos de esta supranacionalidad en el contexto andino, los cuales merecen un análisis detallado.

En primer lugar, se destaca la creación de un organismo sujeto de derecho internacional. La Comunidad Andina no es una mera suma de Estados, sino una entidad con personalidad jurídica propia, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones en el

ámbito internacional, distinta e independiente de sus países miembros. Esta personalidad, sin embargo, es limitada a los objetivos propuestos dentro del proceso de integración (quinto elemento), lo que significa que su capacidad de actuar se circunscribe a las metas y funciones establecidas en sus tratados constitutivos, principalmente orientadas a la profundización de la integración económica y social.

El segundo elemento, y quizás el más definitorio, es el traslado de competencias soberanas de los Estados miembros a órganos creados dentro del organismo internacional, por decisión autónoma y soberana de cada uno de ellos. Este acto de delegación voluntaria es fundamental: los Estados, en ejercicio de su soberanía, deciden ceder parte de sus atribuciones en áreas específicas (como política comercial, aduanas, propiedad intelectual, transporte, entre otras) a las instituciones andinas. Esta cesión no es una renuncia a la soberanía, sino una forma de ejercerla de manera compartida para alcanzar objetivos comunes que difícilmente se lograrían de forma aislada (Vela, 2007).

Consecuencia directa de lo anterior es el ejercicio de competencias por parte de los órganos creados dentro del organismo internacional, con efectos vinculantes para los sujetos del derecho comunitario (tercer elemento). Las decisiones de la comisión de la CAN o las resoluciones de la Secretaría General, por ejemplo, no son simples recomendaciones; son normas que obligan a los Estados miembros y, en muchos casos, a sus ciudadanos y empresas, sin necesidad de un acto posterior de incorporación al derecho interno.

Esto se complementa con las competencias limitadas y otorgadas expresamente a los órganos e instituciones del organismo internacional (sexto elemento), lo que subraya el principio de especialidad: las instituciones comunitarias solo pueden actuar dentro del marco de las competencias que les han sido explícitamente conferidas por los tratados, evitando así extralimitaciones (Duque Belálcazar, 2023).

Finalmente, la supranacionalidad implica la transformación del concepto tradicional del Estado-nación por uno que le permite ejercer decisiones soberanas que son fuentes de derechos y obligaciones en el marco de un organismo internacional (cuarto elemento) (Rodero García, 2015; Gómez Apac y Rodríguez Noblejas, 2020).

Este aspecto refleja una evolución en la concepción de la soberanía, que pasa de ser un atributo absoluto e indivisible a una facultad que puede ser ejercida cooperativamente, lo cual permite a los Estados participar en la creación de un orden normativo superior que, a su vez, genera derechos y deberes para ellos mismos y para sus nacionales.

### **El principio de preservación como pilar de la integridad y efectividad del ordenamiento jurídico andino**

El principio de preservación del ordenamiento jurídico andino no es una abstracción teórica, sino una construcción jurídica sólidamente anclada en el derecho originario de la comunidad (Gómez Apac y Rodríguez Noblejas, 2020; Plata López y Yepes Ceballos, 2009). Su sustento primordial se encuentra en el *Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*.



De manera explícita, el artículo 4º del tratado de creación establece un marco de obligaciones y principios que fundamentan esta preservación. Si bien el texto citado no detalla el contenido íntegro de dicho artículo, es sabido que este y otros preceptos del tratado confieren al tribunal andino la misión de asegurar la legalidad de las normas comunitarias y su aplicación uniforme, elementos intrínsecos a la idea de preservación.

La preservación se materializa, además, a través de las competencias específicas atribuidas al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El conocimiento y la decisión de los diversos recursos y acciones previstos en el tratado —tales como la acción de nulidad, la acción de incumplimiento y la interpretación prejudicial— son los instrumentos procesales mediante los cuales el tribunal ejerce su función de custodio del ordenamiento (Fernández de los Campos y Ortiz Arciniegas, 2015). Cada una de estas herramientas jurisdiccionales tiene un rol directo o indirecto en la mantención de la integridad y la pureza del derecho comunitario:

La acción de nulidad permite controlar la legalidad de las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina, así como de las resoluciones de la Secretaría General, lo cual asegura que estas normas derivadas se ajusten al derecho originario y preserva la jerarquía y coherencia del sistema.

La acción de incumplimiento faculta al Tribunal para determinar si un país miembro ha faltado a las obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico andino; ello garantiza

la efectividad y el acatamiento de las normas comunitarias, lo cual es esencial para su preservación como un sistema jurídico vivo y operante.

La interpretación prejudicial, de carácter obligatorio para los jueces nacionales, busca asegurar la aplicación uniforme del derecho andino en todos los países miembros; así se evitan interpretaciones divergentes que podrían fragmentar el ordenamiento y, por ende, atentar contra su preservación como un cuerpo normativo homogéneo.

Estas competencias, por tanto, no son meras atribuciones funcionales, sino que constituyen el engranaje mediante el cual el principio de preservación se vuelve una realidad tangible en el sistema andino. En suma, la consecuencia directa y más significativa del principio de preservación, apuntalada por la estructura y las competencias de la Comunidad Andina, incluyendo a su Tribunal de Justicia, es la consolidación del carácter vinculante e intangible del ordenamiento jurídico andino (Espíndola Scarpetta y Herrera Rodríguez, 2008; Montaña Galarza, 2002). Esta cualidad es la que distingue a un verdadero sistema supranacional de un simple acuerdo de cooperación internacional (Vargas-Chaves, 2025).

## La seguridad jurídica y su doble concepción

La seguridad jurídica, noción fundamental del derecho, es objeto de intensos debates. Se manifiesta como una exigencia jurídica de naturaleza polisémica y contenido a primera vista indeterminado. No obstante, a pesar de su carácter multifacético, no es un

concepto equívoco, sino que se erige como un valioso instrumento heurístico (Viandier, 1988; Biancarelli, 1996).

Los cimientos teóricos y prácticos de la seguridad jurídica se encuentran en Roma, donde se articulaba en torno a dos principios: la *certitudo* (orientación), que implicaba el conocimiento previo por los sujetos de derecho del comportamiento jurídico esperado, y la *securitas* (realización), que demandaba el respeto efectivo de las normas, la jurisprudencia y los contratos (Acosta-Rodríguez, 2025).

Su teorización formal se remonta al siglo XII, con el auge de la dialéctica. Este periodo vio cómo la reflexión académica, centrada en la investigación y resolución de contradicciones, impactó el derecho, lo que llevó, por ejemplo, a la redacción del *Decreto de graciano* en Bolonia en 1139, que buscó armonizar cánones contradictorios y dotar de coherencia al derecho canónico (Hauriou, 1929).

En Francia, la noción de seguridad jurídica emergió en paralelo al desarrollo del derecho público. Hacia el siglo XIV, aunque amplios sectores se regían por la costumbre y el derecho escrito (situación que persistiría hasta el Antiguo Régimen), la intervención real se concentraba en el derecho público, al que se le atribuía la facultad de “hacer nuevos establecimientos” (Soûlas de Russel y Raimbault, 2003; Acosta-Rodríguez, 2025).

Esta prerrogativa, como documentó Philippe de Rémy, señor de Beaumanoir, en sus *Costumbres de Beauvaisis*, estaba sujeta a condiciones como la irretroactividad, el respeto a los derechos adquiridos, la “causa razonable y el beneficio común”,

y la conformidad con la moral y los preceptos divinos (Valembos, 2005). Un hito significativo fue la orden real de 1454 para la redacción oficial y revisión del derecho consuetudinario, lo que indudablemente contribuyó a reducir la incertidumbre jurídica al formalizar y hacer más accesibles las reglas (Vander Elst, 1986).

En Alemania, desde finales del siglo XIX, la fuerte tradición romanista, la reflexión sobre la limitación del poder arbitrario de los gobernantes y las particularidades de la República de Weimar impulsaron la relevancia de la seguridad jurídica, estrechamente ligada al concepto de Estado de derecho o *Rechtsstaat* (Touboul, 1996).

No obstante, este último experimentó una transformación hacia una concepción puramente formal, reducida a la mera legalidad. Esta mutación fue instrumentalizada por el régimen nazi para legitimar su poder, intentando argumentar que el Tercer Reich cumplía con los criterios de un Estado de derecho al alcanzar la seguridad jurídica mediante el formalismo. Sin embargo, se constató posteriormente que la seguridad jurídica es, en sí misma, un valor inherente al liberalismo y, por ende, contrario a la ideología nacionalsocialista (Acosta-Rodríguez, 2025).

De forma similar, en Italia, el régimen fascista empleó la seguridad jurídica de manera subversiva para coartar la libre aplicación de la ley por parte de jueces y autoridades. La superación de estos regímenes totalitarios y la rematerialización del Estado de derecho tras la Segunda Guerra Mundial propiciaron la rehabilitación de la seguridad jurídica, hoy considerada un

pilar “indispensable para la situación jurídica de una democracia modern”” (Raimbault, 2009).

Esta evolución ha llevado a la consolidación del concepto en diversas tradiciones jurídicas: el *Rechtssicherheitsprinzip* en Alemania, el *princípio da segurança o certeza nas relações jurídicas* en Portugal, la seguridad jurídica en España, la *certezza del diritto* en Italia, o la *rettssikkerhet* en Suecia y Dinamarca, así como su consagración como principio jurídico en Francia o Bélgica (Acosta-Rodríguez, 2025).

En este contexto, la seguridad jurídica presenta una doble concepción, estática y dinámica, que en conjunto definen su alcance y relevancia en el ordenamiento jurídico. Por un lado, la concepción estática de la seguridad jurídica se centra en el conocimiento del derecho y en la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de los actos por parte de los sujetos. En efecto, conocer lo que está permitido o prohibido resulta fundamental para la toma de decisiones; con ello se vincula la seguridad jurídica con la libertad individual. Dicha perspectiva implica, necesariamente, dos elementos cruciales: la publicidad de las normas jurídicas y su claridad y precisión.

Por otro lado, la concepción dinámica de la seguridad jurídica entraña la capacidad de anticipar la evolución del sistema jurídico. Esta faceta también demanda previsibilidad, lo cual permite comprender el derecho en sus transformaciones temporales. En este sentido, “la protección de la ley contra modificaciones arbitrarias es un elemento indispensable de toda seguridad jurídica”,

ya que la previsibilidad requiere una cierta estabilidad; un Estado de derecho en constante modificación imposibilita cualquier forma de anticipación (Mathieu, 1999).

recordaba Hauriou: “Lo que la gente llama estabilidad no es inmovilidad, sino el movimiento general lento y uniforme que permite que las cosas se mantengan en cierta forma general a la que están acostumbradas” (1929, p. 75). Por lo tanto, la verdadera estabilidad implica una “mutabilidad racionalizada”. Esta puede alcanzarse mediante diversas técnicas, como la implementación de medidas transitorias, la limitación de la aplicación inmediata de las nuevas normas y la reducción de hipótesis de mutabilidad abrupta, especialmente la retroactividad (Acosta-Rodríguez, 2025).

Además, en su dimensión dinámica, la seguridad jurídica impide que las situaciones jurídicas sean cuestionadas indefinidamente por las autoridades normativas o jurisdiccionales. De esta forma, fundamenta la teoría de la prescripción y de la ejecución forzosa, y domina la de los derechos adquiridos y la cosa juzgada. Asimismo, establece un nexo crucial entre los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, pues esta última permite que los sujetos de derecho no sufran cambios normativos imprevisibles, salvo que existan razones imperiosas que lo justifiquen (Heuschling, 2002).

En última instancia, la seguridad jurídica, en su doble vertiente, implica la accesibilidad a las normas, la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de las propias acciones y la estabilidad de ciertas situaciones adquiridas. A pesar de su importancia y

desarrollo conceptual, la seguridad jurídica sigue siendo un principio que, en su aplicación práctica, puede estar envuelto en ciertas incertidumbres.

## **Hacia un redimensionamiento del concepto de seguridad jurídica en el derecho comunitario andino**

El ordenamiento jurídico andino se erige como un sistema avanzado y sofisticado, definido por sus características distintivas de supranacionalidad, autonomía, preservación y el principio del complemento indispensable. Estos cuatro pilares no constituyen meros conceptos teóricos, sino que representan los cimientos sobre los cuales se construye y opera diariamente el proceso de integración andino (Farías Mata, 2001). De hecho, reflejan un compromiso soberano de los países miembros con un proyecto común que trasciende las fronteras nacionales, con el objetivo de generar un espacio de oportunidades y desarrollo compartido. Por consiguiente, la fortaleza y la coherencia de este edificio jurídico son determinantes para la viabilidad y el éxito continuo de la Comunidad Andina en un mundo cada vez más interconectado y competitivo, lo que hace que su estudio y comprensión resulten fundamentales para todos los actores involucrados en este trascendental proyecto regional (Tremolada Álvarez, 2005).

En este contexto, la seguridad jurídica emerge como un concepto crucial, aunque se sitúa en medio de tensiones inherentes. Efectivamente, se observa que las dos dimensiones del principio de seguridad jurídica —la necesidad de previsibilidad y la necesidad de adaptar el derecho a

los desarrollos sociales y económicos— se complementan en algunos aspectos, pero también pueden contradecirse significativamente en el marco de la integración andina, alimentando una doble tensión en el sujeto.

Además, los desarrollos precedentes muestran que este imperativo de seguridad jurídica en un contexto de supranacionalidad se presenta aún en una “nebulosa” de principios, subprincipios y reglas invocables en hipótesis muy diversas, lo que puede conducir a soluciones en ocasiones contradictorias, porque “la seguridad de unos no es la de otros”.

Al respecto, cabe señalar que, como concepto de derecho comunitario —el cual, como sabemos es de carácter supranacional— la seguridad jurídica concierne a todas las partes involucradas en un proceso de integración, desde los Estados con sus intereses individuales en el marco de sus contratos sociales internos, hasta el interés del proceso de integración mismo reflejado en el bien común regional pactado.

Sin embargo, estas características pueden ser antagónicas y, por tanto, fuentes de fricción en la implementación de esta seguridad. Particularmente, pueden complicar la acción del Estado, especialmente al intentar conciliar “los imperativos de equidad y los imperativos de estabilidad”. De hecho, algunos temen que, a través de su dimensión estabilizadora, la seguridad jurídica sea utilizada para imponer una ley fija y conduzca al sacrificio del interés general en aras de intereses particulares.

Para superar este riesgo, conviene tener presente que la relatividad es un elemento

inherente a la naturaleza de este imperativo: “el principio de respeto a la seguridad jurídica, por importante que sea, no puede aplicarse de forma absoluta”. En consecuencia, corresponde a las autoridades —son los mismos Estados las fuentes primarias dentro de la Comunidad Andina— buscar un equilibrio entre la protección de los derechos individuales de los Estados y la búsqueda del bien común regional.

Fundamentalmente, esto solo se logra entendiendo que la base de la seguridad jurídica es el principio de preservación del derecho comunitario andino. Por lo tanto, la seguridad jurídica, como parte de este principio, no pretende congelar el derecho. Si aceptamos que *summum ius, summa iniuria* (demasiado derecho mata el derecho), “esto vale también para la seguridad: demasiada seguridad terminaría la seguridad”.

## Discusión

Definir el principio de “seguridad jurídica” representa un desafío considerable. En términos generales, la seguridad se entiende como la ausencia de peligro y la tranquilidad que de ello se deriva. Por consiguiente, precisar el concepto de seguridad jurídica resulta complejo debido a la amplitud de nociones que abarca, especialmente en el derecho comunitario andino como derecho supranacional (Raimbault, 2009; Acosta-Rodríguez, 2025).

La doctrina ofrece diversas aproximaciones a la seguridad jurídica. Una de ellas la describe como “la situación en la que se asegura la correcta ejecución de las obligaciones sin sorpresas y excluye la

incertidumbre en la aplicación de la ley” (Heuschling, 2002). Otra la presenta como “la garantía o protección que tiende a excluir del ámbito jurídico el riesgo de incertidumbre o cambio repentino en la aplicación de la ley” (Valembois, 2005).

Según Hauriou (1929), este principio engloba la protección contra la retroactividad de las leyes, la consolidación a largo plazo de situaciones jurídicas creadas ilegalmente, así como la claridad, precisión y coherencia normativas. Adicionalmente, implica el respeto a los compromisos adquiridos, la confianza en la sanción de las ilegalidades y la garantía de la seguridad personal (Acosta-Rodríguez, 2025).

De manera similar, Touboul (1996) sostiene que la seguridad jurídica se define en función de factores de inseguridad o incertidumbre, y carece de una definición genérica o abstracta. En consecuencia, la seguridad jurídica se manifiesta como un concepto polisémico, con repercusiones incluso en el derecho comunitario.

En este contexto, la preservación del ordenamiento jurídico andino es una cualidad que asegura su carácter vinculante e intangible. Esta se sustenta, fundamentalmente, en los principios y obligaciones emanados del propio *Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, así como en las amplias competencias jurisdiccionales atribuidas a este órgano (Sasaki Otani, 2017). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se erige, así, como el guardián de la legalidad comunitaria, con la potestad de conocer y decidir sobre los recursos y acciones que garantizan la correcta aplicación e



interpretación del derecho andino.

A su vez, la cualidad de preservación se desdobra en dos conceptos cruciales: la obligatoriedad y la intangibilidad. De un lado, la obligatoriedad de las normas andinas emana directamente de la decisión soberana de los Estados miembros de constituir la Comunidad Andina y de transferir competencias a sus órganos (Tremolada Álvarez, 2006). Del otro lado, la intangibilidad se refiere a la prohibición expresa impuesta a los Gobiernos de los Estados miembros de modificar unilateralmente las normas adoptadas en el marco de la Comunidad Andina.

En el caso de la obligatoriedad, al dar este paso, los Estados no solo aceptaron un marco normativo común, sino que también adquirieron derechos y contrajeron obligaciones de hacer y de no hacer frente a los demás socios comunitarios y frente al propio sistema de integración (Covilla Martínez, 2014; Blanco Alvarado, 2019). Estas obligaciones incluyen, por ejemplo, el deber de adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias y de abstenerse de cualquier medida que pueda obstaculizar su aplicación.

En cuanto a la intangibilidad, cualquier intento de alteración o desconocimiento unilateral de una norma comunitaria por parte de un Estado miembro no solo sería ineficaz jurídicamente dentro del ordenamiento andino, sino que también acarrearía responsabilidad internacional para dicho Estado. Esta intangibilidad es esencial para mantener la coherencia, la estabilidad y la previsibilidad del derecho comunitario, elementos indispensables para la confianza

de los actores económicos y sociales en el proceso de integración.

De esta manera, se puede afirmar con solidez que la seguridad jurídica en el derecho comunitario andino encuentra su garantía primordial y más robusta en el principio de preservación del propio ordenamiento jurídico comunitario (Insignares Cera, 2007; Montaña Galarza y Villegas Landázuri, 2019; Blanco Alvarado et ál., 2025). Este principio, al asegurar la obligatoriedad, intangibilidad y aplicación uniforme de las normas andinas, sienta las bases indispensables para la previsibilidad y estabilidad que la seguridad jurídica demanda.

La actuación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como máximo garante de la preservación, es instrumental en este sentido, pues sus interpretaciones vinculantes consolidan un cuerpo normativo coherente y predecible para todos los Estados miembros y sus ciudadanos (Cárdenas Caycedo, 2023; San Miguel Rodríguez, 2018).

Si bien la seguridad jurídica, como se ha discutido, enfrenta tensiones inherentes —entre la necesidad de certeza y la adaptabilidad a nuevas realidades, o entre los intereses estatales individuales y el interés general comunitario— es precisamente el principio de preservación el que ofrece el anclaje necesario.

Al resguardar la integridad e intangibilidad del acervo comunitario, la preservación mitiga el riesgo de interpretaciones o aplicaciones divergentes y unilaterales por parte de los Estados, que constituirían la principal fuente de inseguridad jurídica en un sistema de integración supranacional. La “nebulosa”



de principios y la potencialidad de soluciones contradictorias se ven contenidas por la preeminencia de un derecho comunitario que debe ser preservado en su esencia y finalidad (Chanamé Orbe, 2022).

En todo caso, lejos de “congelar” el derecho o sacrificar el interés general en aras de intereses particulares —temores que pueden surgir ante una concepción estática de la seguridad jurídica—, la preservación, entendida dinámicamente, asegura que cualquier evolución o adaptación normativa se realice a través de los cauces institucionales comunitarios y conforme a los objetivos superiores de la integración (Guerra Rodríguez, 2014).

De esta manera, la preservación no solo protege el derecho existente, sino que también garantiza que los mecanismos para su modificación o adaptación respeten la estructura y los fines del sistema, manteniendo así la coherencia y la confianza en él. Por tanto, el principio de preservación no es meramente una característica más del derecho andino, sino el pilar fundamental que dota de efectividad y credibilidad a la seguridad jurídica.

Sin la salvaguarda activa de las normas comunitarias y su correcta aplicación, cualquier aspiración a una seguridad jurídica genuina dentro de la Comunidad Andina sería ilusoria, y comprometería la predictibilidad necesaria para el comercio, la inversión, la protección de los derechos y, en última instancia, el avance del proyecto de integración regional. Es, en esencia, la condición sine qua non para que el derecho comunitario andino cumpla sus fines integradores con certeza y confianza

para todos los actores involucrados.

## Conclusiones

El proyecto de integración andino, conocido como la Comunidad Andina, trasciende la mera concertación política y económica al haber constituido un sistema legal propio y robusto. Para su adecuado funcionamiento y el logro de sus metas, este ordenamiento se apoya en características distintivas que son esenciales.

De estos, la supranacionalidad resalta como el elemento central del sistema jurídico andino, ya que establece una diferencia cualitativa fundamental con el derecho internacional público tradicional. Esta condición se traduce en la transferencia de ciertas competencias soberanas por parte de los Estados miembros hacia órganos comunitarios, cuyas normativas y decisiones adquieren un carácter obligatorio y, en numerosos casos, son de aplicación directa en los territorios nacionales.

En el contexto de un sistema legal con estas particularidades, el concepto de seguridad jurídica cobra una importancia significativa. Aunque es una noción primordial en el ámbito del derecho, la seguridad jurídica es objeto de continuos y profundos debates, especialmente en el ámbito del derecho comunitario. Se la considera una exigencia legal con múltiples facetas (polisémica) y un contenido que, en una primera aproximación, puede parecer indeterminado. No obstante, a pesar de esta complejidad, no se trata de un concepto ambiguo, sino que se constituye como una valiosa herramienta heurística o de

descubrimiento.

En este contexto, dentro del singular ecosistema del derecho comunitario andino, la seguridad jurídica no flota en la abstracción, sino que se ancla firmemente en el principio de preservación de su ordenamiento. Esta cualidad esencial es la que dota al sistema de su carácter vinculante e intangible, elementos cruciales para la predictibilidad y la estabilidad.

La cualidad de preservación se manifiesta primordialmente a través de dos conceptos interconectados: la obligatoriedad y la intangibilidad de las normas andinas. La obligatoriedad es una consecuencia directa de la decisión soberana de los Estados miembros al constituir la Comunidad Andina y ceder parcelas de competencia a sus órganos. Este acto fundacional no solo estableció un marco normativo común, sino que también generó un plexo de derechos y obligaciones recíprocas — de hacer y de no hacer— tanto entre los socios comunitarios como frente al propio sistema de integración. El deber de adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias y abstenerse de obstaculizar su aplicación son manifestaciones claras de esta obligatoriedad.

Por otro lado, la intangibilidad se refiere a la proscripción explícita de que los Gobiernos de los países miembros modifiquen unilateralmente las normas comunitarias. Cualquier intento de alteración o desconocimiento por parte de un Estado no solo carecería de eficacia jurídica dentro del ordenamiento andino, sino que también podría acarrear responsabilidad internacional. Esta intangibilidad es vital, pues salvaguarda la coherencia, estabilidad

y previsibilidad del derecho comunitario, elementos indispensables para fomentar la confianza de los actores económicos y sociales en la solidez y continuidad del proceso de integración.

A su vez, la labor del Tribunal de Justicia, como máximo garante de la preservación, es instrumental. Sus interpretaciones vinculantes y sus sentencias no solo resuelven disputas, sino que, además, activamente consolidan un cuerpo normativo coherente y predecible para todos los Estados miembros y sus ciudadanos.

Es precisamente este principio de preservación, operativizado por el tribunal, el que ofrece un anclaje necesario frente a las tensiones inherentes a la seguridad jurídica, como el dilema entre la certeza y la adaptabilidad a nuevas realidades, o entre los intereses estatales individuales y el interés general comunitario. No en vano, al resguardar la integridad e intangibilidad del acervo comunitario, la preservación mitiga el riesgo de interpretaciones divergentes y aplicaciones unilaterales por parte de los Estados, que constituirían la principal amenaza a la seguridad jurídica en un sistema supranacional.

En suma, aunque la noción de seguridad jurídica presente desafíos conceptuales por su amplitud y polivalencia, en el derecho comunitario andino encuentra una garantía primordial y robusta en el principio de preservación. Este principio, al asegurar la obligatoriedad, intangibilidad y aplicación uniforme de las normas andinas, sienta las bases indispensables para la previsibilidad y estabilidad que la seguridad jurídica exige.

## References

- Acosta-Rodríguez, J. (2025). La sécurité juridique, impératif accepté mais plurivoque (working paper del Grupo de Investigación en Teoría del Derecho, de la Justicia y de la Política). Universidad La Gran Colombia.
- Antolínez Sánchez, E. F. (2021). El papel del derecho comunitario andino en la temática del medio ambiente desde las competencias de los municipios. *IUSTA*, 54, 1–27. <https://doi.org/10.15332/25005286.6554>
- Arroyave-Quintero, M. A. (2008). Ineficacia crónica del derecho andino: uno de los factores importantes para el ocaso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). *Papel Político*, 13(1), 299–322. [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0122-44092008000100010](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-44092008000100010)
- Biancarelli, J. (1996). *Sécurité juridique: définition et analyse de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes*. Droit Fiscal, 19, 1–40.
- Blanco Alvarado, C. (2019). El ámbito del derecho en la descentralización territorial colombiana y la Comunidad Andina (CAN). *Revista Republicana*, 26, 93–108. <https://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/517>
- Blanco Alvarado, C., Fernández Muñoz, M. L., Huertas Díaz, O. y Gual Acosta, J. M. (2025). Derecho administrativo comunitario andino y su incidencia en el sistema jurídico colombiano. *Jurídicas CUC*, 21(1), 29–43. <https://doi.org/10.17981/juridcuc.21.1.2025.02>
- Blanco Alvarado, C. y Fernández Muñoz, M. L. (2021). El derecho comunitario andino y el derecho interno: algunas propuestas de coordinación. *Revista Republicana*, 31, 21–38. <https://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/776>
- Blanco Alvarado, C., Echeverry Botero, D. y Ortega Ruiz, G. (2022). La naturaleza jurídica del derecho comunitario andino. *Verba Iuris*, 47, 77–89. <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/view/9144>
- Brewer Carías, A. R. (2003). *Derecho comunitario andino*. Fondo Editorial PUCP.
- Cárdenas Caycedo, O. A. (2023). La dimensión comunitaria del juez interno en Colombia: aplicación local del derecho comunitario andino. *Revista Científica Codex*, 4(6). <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/codex/article/view/4414>
- Chanamé Orbe, R. (2022). El derecho comunitario andino. *Revista Peruana de Derecho Internacional*, 73(171), 113–134. <https://doi.org/10.38180/rpdi.v73i171.289>
- Covilla Martínez, J. C. (2014). Principio de primacía en derecho comunitario europeo y andino. Su aplicación por la administración pública. *Revista de Derecho Administrativo*, 19, 41–61. <https://repositori.upf.edu/items/08c6ca59-6512-48b9-9c30-afabbabd28e1>
- Duque Belálcazar, C. D. (2023). Los elementos de uso común en el derecho comunitario andino. *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, 18, 41–70. <https://ojs.austral.edu.ar/index.php/ripi/article/view/1181>
- Espíndola Scarpetta, C. A. y Herrera Rodríguez, D. L. (2008). El sistema jurídico andino: ¿utopía o realidad jurídica? *Criterio Jurídico*, 8(1), 35–64. <https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/962>
- Farías Mata, L. H. (2001). Importancia de la regulación de la propiedad intelectual por el derecho comunitario andino. *Iuris Dictio*, 2(4). <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/article/view/555>
- Fernández de los Campos, A. y Ortiz Arciniegas, E. E. (2015). *El derecho comunitario andino y su control jurisdiccional*. UNAB.
- García Brito, G. (2024). La acción de incumplimiento como garantía de la eficacia del derecho comunitario andino. En TJCAN (Ed.), *Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 1979–2024. 45 años de creación y 40 años al servicio del derecho y la integración* (pp. 131–156). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Gómez Apac, H. R. y Rodríguez Noblejas, K. M. (2020). La acción de nulidad en el derecho comunitario andino como un proceso contencioso administrativo. *USFQ Law Review*, 7(1), 307–334. <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/lawreview/article/view/1738>
- Guerra Rodríguez, E. (2014). Supremacía constitucional y control del derecho comunitario. *Foro: Revista de Derecho*, 22, 37–62. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/view/441>
- Hauriou, M. (1929). *Précis de droit constitutionnel*. Sirey.
- Heuschling, L. (2002). *État de droit, Rechtsstaat, Rule of Law*. Dalloz.
- Indacochea, J. M. (2024). El recurso por omisión en el derecho comunitario andino. En TJCAN (ed.), *Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 1979-2024* (pp. 281–291). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Insignares Cera, S. (2007). El derecho comunitario andino ¿obstáculo en la integración? *Revista de Derecho*, 27, 295–307. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85102712>
- Kosovic Kaune, L. A. (2007). *Jueces nacionales como jueces de derecho comunitario*. Universidad Andina Simón Bolívar.
- Mathieu, B. (1999). Constitution et sécurité juridique en France. *Annuaire International de Justice Constitutionnelle*, A-1999, 301–339. [https://www.persee.fr/issue/aijc\\_0995-3817\\_2000\\_num\\_15\\_1999](https://www.persee.fr/issue/aijc_0995-3817_2000_num_15_1999)
- Montaño Galarza, C. (2002). Integración y supranacionalidad... *Comentario Internacional*, 4, 274. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/comentario/issue/view/17>
- Montaño Galarza, C. (2003). Comentarios y reflexiones sobre el derecho comunitario. *Foro: Revista de Derecho*, 1, 203–238. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/view/266>
- Montaño Galarza, C. y Villegas Landázuri, P. (2019). El derecho tributario comunitario andino. En C. Montaño Galarza (ed.), *Tratado de fiscalidad internacional para el Ecuador* (pp. 225–259). Ius et Historiae Ediciones.
- Montoya Céspedes, M. N. (2009). *Tensiones constitucionales provocadas por la supremacía del derecho internacional comunitario andino en Colombia*. Universidad de los Andes.
- Navarrete Barrero, O. I. (2006). El papel del juez comunitario andino... *Foro: Revista de Derecho*, 6, 27–38. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/view/319>
- Plata López, L. C. y Yepes Ceballos, D. (2009). Naturaleza jurídica de las normas comunitarias andinas. *Revista de Derecho*, 31, 196–223. <https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/view/699>
- Raimbault, Ph. (2009). *Recherche sur la sécurité juridique en droit administratif français*. LGDJ.
- Rodero García, R. (2015). *La dimensión jurídica del derecho comunitario andino* [Tesis doctoral]. Universidad de Sevilla.
- Rodríguez Aguilera, C. (2016). La autonomía del derecho comunitario andino... *Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión*, 224–245. <https://www.revistastpr.com/index.php/rstpr/article/view/197>
- Rodríguez, L. R. (2018). Ampliación del sistema tradicional... *Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión*, 68–92. <https://www.revistastpr.com/index.php/rstpr/article/view/305>
- San Miguel Rodríguez, W. S. (2018). El derecho comunitario andino y su desarrollo normativo. *Revista Peruana de Derecho Internacional*, 68(159), 101–116. <https://spdiojs.org/ojs/index.php/RPDI/article/view/783>
- Santos Rodríguez, J. E. (2013). El derecho administrativo del sistema comunitario andino. *Revista Digital de Derecho Administrativo*, 10, 21–44. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/3684>
- Sasaki Otani, M. Á. (2012). El sistema de sanciones por incumplimiento... *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 1(12), 301–337.

<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/400>

Sasaki Otani, M. Á. (2017). *La responsabilidad patrimonial de los países miembros de la Comunidad Andina frente a los particulares...* [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid.

Soûlas de Russel, D. y Raimbault, Ph. (2003). Nature et racines du principe de sécurité juridique. *Revue Internationale de Droit Comparé*, 1(55), 85–103. [https://www.persee.fr/doc/ridc\\_0035-3337\\_2003\\_num\\_55\\_1\\_5561](https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2003_num_55_1_5561)

Tangarife Torres, M. (2005). *Derecho de la integración en la Comunidad Andina*. CCB.

Touboul, F. (1996). *Le principe de sécurité juridique. Essai de législation* [Tesis doctoral]. Université Paris XI.

Tremolada Álvarez, E. (2005). Aplicación del derecho andino... *OASIS*, 11, 151–165. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/2398>

Tremolada Álvarez, E. (2006). El derecho andino... *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, 57, 35–75. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r24668.pdf>

Uribe Restrepo, F. (1990). *El derecho de la integración en el Grupo Andino*. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Valembois, A.-L. (2005). *La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français*. LGDJ.

Vander Elst, R. (1986). Justice et sécurité juridique. En G. Haarscher y L. Ingber (eds.), *Justice et argumentation* (pp. 19–52). Éditions de l'Université de Bruxelles.


Vargas-Chaves, I. (2025). *Derecho internacional*. Grupo Editorial Ibáñez.

Vela, B. (2007). La encrucijada del proceso andino de integración. *OASIS*, 12, 425–432. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/2432>

Viandier, A. (1988). *Recherche de légistique comparée*. Springer-Verlag.

## Citar como:

Vargas-Chaves, I. (2025). El principio de preservación en el derecho comunitario andino: un imperativo desde la seguridad jurídica. *Via Inveniendi et Iudicandi*, 20(2), 47-65.

 <https://doi.org/10.15332/19090528.10993>

Recibido: 04/04/2025

Aceptado: 04/05/2025